

Candidaturas de personas con discapacidad. Implicaciones para la democracia representativa mexicana. Elección 2020-2021.

Laura Aritmética Jaime Oliver

Resumen.

En los comicios del 2020-2021 en México se implementaron acciones afirmativas para garantizar que personas con discapacidad accedieran a candidaturas para diputaciones federales. Estas medidas presentadas como cuotas electorales fueron promovidas por ciudadanos y mandatas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La implementación de estas medidas es una oportunidad para revisar los supuestos de la representación política y los efectos que puedan presentarse para la democracia en general. El presente trabajo se pregunta ¿qué implicaciones tienen las candidaturas de las personas con discapacidad para la representación política? Y ¿qué obstáculos y oportunidades políticas e institucionales tuvieron los/as candidatos/as postulados/as por partidos políticos a través de la acción afirmativa para personas con discapacidad? Los objetivos son: a) discutir las implicaciones normativas de la participación electoral de las personas con discapacidad para la representación y la democracia; y b) analizar la configuración institucional de las cuotas, su aplicación por los partidos políticos y los resultados electorales que se produjeron.

Introducción

En los comicios del 2020-2021 en México se implementaron acciones afirmativas para garantizar que personas con discapacidad accedieran a candidaturas para diputaciones federales. Estas medidas presentadas como cuotas electorales fueron promovidas por ciudadanos y mandatas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La implementación de estas medidas es una oportunidad para revisar los supuestos de la representación política y los efectos que puedan presentarse para la democracia en general. El presente trabajo se pregunta ¿qué implicaciones tienen las candidaturas de las personas con discapacidad para la representación política? Y ¿qué obstáculos y oportunidades políticas e

institucionales tuvieron los/as candidatos/as postulados/as por partidos políticos a través de la acción afirmativa para personas con discapacidad? Los objetivos son: a) discutir las implicaciones normativas de la participación electoral de las personas con discapacidad para la representación y la democracia; y b) analizar la configuración institucional de las cuotas, su aplicación por los partidos políticos y los resultados electorales que se produjeron.

En resumen, se encontró que la configuración de las cuotas no generó oportunidades sustanciales para que más personas en esta condición obtuvieran un cargo de elección popular. Aunque el crecimiento de personas con discapacidad en la Cámara de Diputados en comparación con otros periodos legislativos es significativo, aún no se logra una representación en términos proporcionales a la población existente. Los principales obstáculos fueron: la configuración de las cuotas, la falta de transparencia de quienes fueron postulados por la acción afirmativa, el presupuesto que estas candidaturas tuvieron en campaña, la falta de propuestas concretas para este sector población, y la inapropiada comunicación política dirigida a estos grupos. Las principales oportunidades que presentaron las personas con discapacidad para obtener una candidatura fueron: ser postuladas por un partido político con rentabilidad electoral, o por partidos políticos que internamente contaban con medidas de promoción de la participación de las personas con discapacidad. Además, las personas con discapacidad tuvieron más oportunidad de obtener una diputación si contaban con trayectoria política dentro de sus partidos políticos, en cargos públicos y/o en alguna actividad pública abiertamente dedicada para personas con discapacidad.

1. Para discutir la representación de las personas con discapacidad

Las teorías de la representación desde una perspectiva normativa han dado razones y modelos para considerar que esa práctica es democrática y es la mejor posible dadas las condiciones de complejidad de las sociedades contemporáneas. Defensores de la representación, como David Plotke (1997) diluyen la

contraposición entre participación y representación, al no considerarla elementos opuestos de una misma categoría. Para él lo opuesto de la representación no es la participación, sino la exclusión; y lo opuesto de la participación es la abstención. Desde este punto Plotke parte para hablar de ciertas características que debería tener la representación para ser inclusiva. Primero, la representación no debe ser identitaria, dado que no puede considerarse a un/a representante como garante de ciertos intereses en detrimento de otros. La representación implica conflicto irresoluble de identidades y por ende conflicto de demandas. Segundo, la representación debe ser una relación significativa y no una relación natural, lo que importa es cómo se gestan las relaciones entre representantes y representados/as, por ejemplo, a través de prácticas dialógicas, y no su cercanía identitaria e ideológica. Tercero, la representación es contextual, las demandas ciudadanas están sujetas al tiempo y al espacio y por ende están en constante cambio e interpretación.

Para Plotke (1997), las anteriores características posibilitan que la ciudadanía mantenga una relación de autonomía frente a quienes ejercen la representación, pues se logra diferenciar entre la actividad de la política y otras prácticas; se centra en los intereses; y se da mayor importancia a las actividades en las que se busca el entendimiento entre los/as representantes, como la deliberación.

Bajo el planteamiento de Plotke cualquier tipo de exclusión de ciertos grupos debería ser considerado un factor de cuestionamiento y demérito de la representación, principalmente si la exclusión se da en la elección de unos intereses, en detrimento de otros. Las condiciones de las personas con discapacidad en el espacio público cuestionan esta propuesta normativa. Por una parte, si la propuesta invita a que la ciudadanía se acerque a los/as representantes por medio de prácticas deliberativas y no identitarias, se tendría que analizar las posibilidades reales que tienen las personas con discapacidad para participar. En otras palabras, sería necesario preguntarse quiénes pueden deliberar y quiénes no pueden hacerlo debido a sus condiciones físicas e intelectuales. Por ejemplo, las

personas con discapacidades auditivas, de habla o intelectuales estarían excluidas si en las deliberaciones públicas no se consideran formas accesibles de comunicación, incluso estarían excluidas las personas con discapacidades motrices, si los espacios deliberativos no son accesibles a distintas modalidades de movilidad. Como el mismo Plotke lo establece, ante la exclusión de estas personas de la deliberación, la representación que de ella emana no sería democrática.

Por otra parte, si sólo se valora la representación tomando en cuenta la incorporación de intereses en políticas públicas y legislación, se podría evaluar la representación de forma negativa, pues los intereses de esta población en la agenda pública no han sido ampliamente discutidos. El planteamiento de Plotke no proporciona elementos para la participación de las personas con discapacidad en las deliberaciones públicas y no reconoce que ciertos sectores de la población no logran incorporar sus intereses en la agenda pública, si no están presentes en los espacios de toma de decisiones.

Nadia Urbaniti (2000), en una línea de defensa similar a la Plotke, considera que la representación, para no alejarse de la participación, debe promover la deliberación, esto produciría un escenario propicio para que una gran diversidad de personas pueda emitir sus opiniones. Para ella la forma indirecta de hacer política, en este caso a través de la representación, ocurre en el discurso político, el cual fomenta el proceso democrático; otorga una oportunidad importante para que la ciudadanía forje un carácter democrático de la política; y colabora para que los/as individuos/as formen sus propios juicios políticos y reconozcan los juicios de otros/as.

Al igual que la propuesta de Plotke, Urbaniti no considera la participación de las personas con algún tipo de dificultad para comunicarse en espacios deficientes para integrar distintas formas de expresar opiniones y demandas. A pesar de que la deliberación es una herramienta interesante para extender la representación, debemos profundizar en cómo garantizar que personas con discapacidad puedan, por una parte, opinar en sus propias expresiones; y, por otra parte, apropiarse de

espacios material y cognitivamente accesibles para que puedan participar. La deliberación en sí misma, sin problematizar en las distintas formas de comunicación que pueden existir en un espectro amplio de capacidades intelectuales y físicas, tiende a oscurecer la diversidad, incluso a excluirla.

La representación de las personas con discapacidad y las implicaciones para la democracia.

La representación política de las personas con dificultad produce efectos positivos para la calidad democrática. Por una parte, este sector de la población tiene mayores posibilidades de incorporar sus intereses en la agenda pública, pero también su participación produce valoraciones positivas de las instituciones políticas. En el plano de lo simbólico, la visibilización de personas con discapacidad introduce discusiones sobre la diversidad, no sólo de identidades, sino de cuerpos, así como cuestiona la igualdad supuesta por la democracia liberal y pone en el centro la distintas formas de ejercer la ciudadanía, desde el privilegio o desde la desventaja. A continuación, se muestran una serie de argumentos a favor de la representación de las personas con discapacidad que parten desde los beneficios que obtiene esta población, hasta llegar a los resultados simbólicos positivos para la sociedad.

1. La representación de las personas con discapacidad produce oportunidades para incluir sus intereses en la agenda pública.

Brennan y Hamlin (1999), en una defensa de la representación, argumentan que la representación produce mayores beneficios a un/a actor/a racional, que la participación directa. Para ellos, la representación genera competencia entre propuestas, lo cual acelera los procesos políticos al visibilizar y dar sentido a ciertos intereses que los/as ciudadanos/as en sí mismos/as se tardarían en formular si lo hicieran sin intermediarios. Brennan y Hamlin (1999), llaman a los/as representantes emprendedores/as políticos, quienes, por medio de la movilización en las campañas

políticas, logran dar forma a los intereses de la ciudadanía. Además, los/as emprendedores/as políticos logran en las asambleas, ya como representantes, generar información y vigilancia de las acciones de los gobiernos con mayor atención, de lo que harían los/as ciudadanos/as de forma directa. Para ellos, aunque la democracia directa es un ideal que se persigue, consideran que la representación, o la democracia indirecta es preferible debido a los resultados que genera.

Las personas con discapacidad en la representación política se pueden convertir en emprendedores/as políticos que dan forma a sus intereses, acelerando su visibilidad pública e introduciendo sus demandas en las legislaciones y las políticas públicas. En otras palabras, la representación descriptiva (Pitkin, 1985), a partir de simular un espejo de la sociedad, no sólo incluye de manera simbólica a estos grupos, también les otorga herramientas para agregar en la agenda pública sus intereses.

2. La representación de las personas con discapacidad produce apoyos a los gobiernos democráticos.

La representación política de las personas con discapacidad se inscribe en una política de la presencia (Phillips, 2003) donde quienes integran una sociedad están presentes en los cargos de elección popular, no sólo como símbolos, también como actores/as determinantes para la toma de decisiones públicas. La representación basada en la identidad ha tenido resultados alentadores en países que han incluido cuotas para grupos minoritarios. En el estudio de Baducci, et al. (2004) en Estados Unidos y Nueva Zelanda, se encontró que la representación descriptiva de grupos minoritarios importa porque incrementa el conocimiento sobre quiénes son los/as representantes, mejora la evaluación de la respuesta del gobierno e incrementa la participación electoral. Estos resultados dan muestra de que la representación descriptiva, en este caso incorporando minorías como las personas con discapacidad, abona a la legitimidad, representación, participación y buen funcionamiento del gobierno,

3. La representación de las personas con discapacidad produce una narrativa sobre la diversidad más inclusiva.

Si las personas con discapacidad lograrán mayores espacios de representación política, modificarían sustancialmente no sólo su propia situación social, política y económica, además, abonarían a innovaciones sociales que cuestionarían y transformarían prejuicios y parámetros sociales discriminatorios más amplios. Para comenzar la democracia renovarían algunos de sus valores y les otorgaría un significado diferente. Según Mark Warren (2005) la norma básica de la democracia es “la inclusión que otorga poder a aquellos afectados por acciones y decisiones colectivas” (115). La incorporación de las personas con discapacidad en los espacios de representación política daría un sentido distinto a la inclusión, valor sustancial en la democracia, pues no sería incluir a los iguales, sino la inclusión de la diferentes.

La inclusión debería ser una condición de la democracia, pero la forma de hacerlo requiere aclarar quiénes y bajo qué supuestos son actores/as válidos/as en la toma de decisiones públicas, en otras palabras, quiénes componen la ciudadanía. Beckett (2006) denuncia que los debates sobre la ciudadanía no han puesto atención en la condición de discapacidad. La ciudadanía al obviar la condición física de las personas ha pasado por alto las desigualdades producidas por la diversidad de cuerpos. La forma en cómo se desenvuelven los cuerpos en los espacios y la imagen que proyectan determinan la lógica de las participaciones, por ello, tratar a la ciudadanía desde el territorio de los cuerpos, por una parte, abona a descubrir criterios de exclusión, y por otra, podría construir una postura crítica para hacer cambios en los parámetros de inclusión. Para Avril Minich (2014) la metáfora del cuerpo es parte sustancial en la nación. La nación es una imagen de un cuerpo entero, sano, sin discapacidades, exento de la contaminación. Aunque la imagen parece a simple vista inocua, como representación de la composición de la comunidad política, justifica la marginación, no sólo de migrantes, también de personas con alguna discapacidad y enfermedades. La investigación realizada por

Minich (2014) propone superar esa imagen del cuerpo y sustituirlo por una idea de comunidad integrada por cuerpos discapacitados que sólo existen interdependientemente. La ciudadanía, desde una óptica de la participación de las personas con discapacidad, abriría la discusión sobre el cuerpo y sus distintas formas en las que posibilita u obstaculiza la participación política.

La integración de las personas con discapacidad en la comunidad política abre la posibilidad de que más grupos minoritarios pueden ser representados. La posibilidad de observarlos en los espacios de toma de decisiones crea una imagen más abierta sobre los/as que pueden estar ahí, se proyecta una imagen de la comunidad política más incluyente. En particular, los medios de comunicación podrían jugar un papel importante en reproducir imágenes sobre la discapacidad que no se asimile como anormalidad, sino como expresiones de cuerpos alternativos (Elcessor, 2016).

La perspectiva de Anne Phillips (1993) podría concluir los alcances democráticos de las personas con discapacidad en la representación. Ella considera que detrás de las teorías democráticas se sustenta el supuesto de una homogeneidad, que asimila a todos/as como iguales, produciendo ceguera sobre las relaciones desiguales y opresivas. Lo anterior se promueve a través de la aspiración de la igualdad política, pero que, aplicada a sociedades ampliamente desiguales, genera exclusión de grupos minoritarios. Para Phillips (1993) la aspiración de la igualdad debe ir acompañada de medidas formales para garantizar la representación de las personas menos aventajadas. La dificultad de estas medidas es descifrar qué grupos cuentan cómo representados y cuáles no. Para resolverlo, Phillips (1993) da una respuesta rápida y titubeante: la política se encargaría de delinear los límites de las representaciones. Para ella, esto tendría el peligro de dejar en manos de quienes hacen política la inclusión. Sin embargo, considera que las movilizaciones políticas podrían hacer un contrapeso y presión para incorporar a más grupos en la representación. Aunque no satisfecha con su respuesta, Phillips (1993) propone que el tema de la representación parta de reconocer que socialmente coexisten

diferentes ciudadanos/as, algunos/as pocos/as con privilegios y otros/as más con menos ventajas. Desde su perspectiva feminista, que enfatiza en la heterogeneidad y la diferencia, la democracia se beneficia con la diversidad, dado que la mayoría de las personas están por fuera de los límites del dominio de la normalidad, que suponen los supuestos igualitarios e individualistas, sobre todo del liberalismo imperante en las teorías democráticas.

El abordaje de Phillips permite entender cómo la representación política produce un significado diferente cuando se incorporan grupos minoritarios antes excluidos. En el caso de las personas con discapacidad, su incorporación en cargos públicos crea una narrativa positiva sobre la diversidad y reduce la exclusión en términos democráticos. Por una parte, la inclusión de personas con discapacidad en espacios de elección popular expresa abiertamente la existencia de las diferencias entre los/as privilegiados/as y los/as menos aventajados/as, a través de un proceso de reconocimiento de personas que han sido históricamente excluidas de la comunidad política; y por otra parte, las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones cuestionan la idea de la homogeneidad ciudadana, en especial debaten y restan relevancia al modelo de una supuesta normalidad.

En resumen, las teorías de la representación que se centran en el valor de la deliberación han olvidado discutir o profundizar en las distintas formas en las que procesos deliberativos pueden excluir a las personas con discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad en la representación no sólo traería beneficios sustanciales para la población que se encuentra en tal condición, sino que cambiaría de forma positiva la percepción sobre la democracia, se transformaría la idea de la inclusión y de la ciudadanía, poniendo énfasis en la diversidad de personas y diversidad de cuerpos.

Situación de la ciudadanía de las personas con discapacidad en México.

Las personas con discapacidad son uno de los grupos vulnerables más numerosos en el mundo; el 15 por ciento de la población cuenta con una discapacidad (OMS, 2021). Las discapacidades van en ascenso debido al aumento de enfermedades crónicas y al incremento de la tasa de envejecimiento mundial. Lo anterior, proporciona información suficiente para suponer que en un futuro no muy lejano una porción importante de la ciudadanía tendrá alguna discapacidad. En América Latina se estima que más de 85 millones de personas cuentan con una discapacidad, el 14.7 por ciento de la población total (García, et al. 2021). En México 20,838,108 personas viven con alguna discapacidad o alguna limitación, esto representa el 16.5 por ciento de la población total, siendo 53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres (INEGI, 2020). El 80.5 por ciento de las personas con discapacidad son mayores de edad, en otras palabras, están en posibilidad de ejercer sus derechos políticos electorales a plenitud.

La población con discapacidad, así como cualquier otra persona que detente la ciudadanía en México, debe contar con la credencial para votar para ejercer derechos políticos. Sin embargo, la credencialización no ha significado en mayor participación política. En el periodo del 2013 al 2018, 453,970 personas con discapacidad tramitaron su credencial. A pesar de ello, sólo 105,056 personas con esta condición votaron en la elección del 2018. La mayoría de ellas con alguna discapacidad motriz y visual¹. De lo anterior se puede asumir que la credencial para votar fue utilizada para fines diferentes al ejercicio del voto. La credencialización por sí misma en ese periodo no promovió el ejercicio de los derechos políticos electorales.

En México, las personas con discapacidad también pueden participar en las elecciones como funcionarias de casilla. En la elección del 2017-2018 de las 1,963 personas con esta condición que se invitaron a participar, sólo 1,564 aceptaron, representando sólo el 0.11% de la ciudadanía que se requería para todo el territorio nacional. Sin embargo, el día de la elección sólo se presentaron en las mesas

¹ La información fue tomada de la sentencia SUP-RAP-121/2020 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

directivas de casilla 776. La ciudadanía que colabora como funcionarios/as de casilla son la base institucional para la creación de confianza en los resultados electorales, la idea de ser miembros/as de las comunidades y no participantes de un partido político o servidores/as públicos quienes dan fe de la organización y procesamiento de votos, dota de legitimidad a los comicios. De esta forma, la inclusión de personas con discapacidad en la organización de las elecciones incrementaría la pluralidad de personas en el proceso y las integraría a una función relevante para la democracia. Sin embargo, los números de participación todavía son bajos.

En el caso de las candidaturas, las personas con discapacidad tienen aún menos participación. Se tiene asentado que para la elección del 2017-2018 se registraron sólo 61 candidaturas, siendo 40 personas con discapacidad propietarios y 21 suplentes. La cifra es baja en comparación con las candidaturas para esos comicios, pues sólo representó el 0.28 por ciento.

Finalmente, las personas con discapacidad que ejercieron el cargo público para la elección del 2017-2018, fueron minúsculos. Dos personas a nivel federal, una electa por mayoría relativa y otra por representación proporcional; a nivel subnacional una persona en el Congreso local de Zacatecas y el gobernador de Puebla. En términos numéricos, este sector de la población no logró la representación política del 6 por ciento, porcentaje que reflejaría con exactitud la presencia de estas personas contabilizadas en ese periodo.

El modelo de atención de la discapacidad ha sido una de las razones por la cuales la discapacidad no ha tenido notoriedad en la agenda pública o es comprendida de forma negativa para el ejercicio de la ciudadanía. Las medidas que se implementaban para atender los obstáculos que enfrentaban las personas con discapacidad se habían centrado en la reproducción de un modelo asistencialista. En México, en la década de los 70's y a partir de una visión del Estado paternalista, las personas con discapacidad fueron tomadas como aquellas que requerían tutela y auxilio del Estado para la toma de decisiones. En este modelo, a esta población

no se les garantizaba su participación activa en las decisiones políticas (Carreón, 2018).

En los últimos años, el modelo anterior también nombrado médico-asistencialista ha evolucionado lentamente a uno de inclusión social, con una visión de derechos humanos. Este modelo pone en el centro la idea de igualdad de oportunidades, donde todas las personas, no importando su condición física o intelectual, deben ser consideradas como participantes activos de la sociedad, con todas las posibilidades de tomar decisiones (Carreón, 2018).

Justo en ese modelo, se instauran las medidas para que las personas con discapacidad puedan ejercer con plenitud sus derechos político-electorales. Desde una visión de derechos humanos se intenta entrelazar los derechos fundamentales como el derecho al voto, con los derechos de acceso a la solución de problemas, incluido aquellos producidos por la discapacidad (Andrade, 2020).

El marco jurídico de las personas con discapacidad en México.

Las legislaciones en materia de protección de las personas con discapacidad pueden rastrearse desde 1983, cuando el Senado de la República y el Ejecutivo ratificaron el *Convenio sobre la Readaptación no discriminación profesional y el Empleo para la Personas Inválidas*. Para 1999, se ratificó *la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad*; y en 2006 *la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* (Martínez, 2012). Este último documento ha sido el referente más recurrido para plantear innovaciones electorales en favor de las personas con discapacidad.

En la *Convención* se establece al Estado como sujeto obligado, donde lo compromete a “asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad” (Artículo 4, inciso 1). En el caso de los derechos políticos electorales menciona que los Estados garantizarán que

“las personas con discapacidad puedan participar efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás, a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas entre otras formas” (Artículo 29, inciso b).

La *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* ha sido documento base para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación responda a demandas de ciudadanos en búsqueda de la protección de sus derechos políticos electorales. En el Acuerdo general SUP-AG-40/2018, el ciudadano Roque Velázquez pidió que se le incluyera en una de las 17 fórmulas de candidaturas en la lista nacional plurinominal para el Senado de la República del Partido Encuentro Social (PES). El Tribunal, apelando a los acuerdos de la *Convención* pidió al máximo órgano del partido responder la petición del ciudadano, de forma accesible, atendiendo su condición de discapacidad. En una queja posterior, resuelta en SUP-REC-1150/2018, el ciudadano Pedro Martínez Flores impugnó las asignaciones de diputaciones por principio de representación proporcional que resolvió el Consejo General del Instituto Electoral de Zacatecas, pues alegó ser desprovisto de esa asignación porque se privilegió el principio de paridad. El Tribunal sostuvo su resolución en el *Convenio* antes citado y en el *Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación de las Personas con Discapacidad*, para que fuera regresado el cargo al ciudadano, argumentando que, frente a condiciones de vulnerabilidad, como la discapacidad, se debía elegir sobre un principio de *Paridad Flexible*.

En el 2019, el ciudadano José Alfredo Chavarría Rivera, se inconformó en contra del Congreso del Estado de Hidalgo debido a que había omitido legislar en favor de garantizar candidaturas para las personas con discapacidad. En la sentencia SUP-JDC-1282/2019, una vez más justificándose en la *Convención*, el Tribunal estableció la obligación del Estado Mexicano para diseñar acciones afirmativas para personas con la condición de discapacidad.

En el expediente SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS, el Tribunal, pide al INE que se encargue de generar y de aplicar acciones afirmativas para las personas con

discapacidad, esto a partir de una apelación interpuesta por el ciudadano José Alfredo Chavarría Rivera, quien ya había interpuesto otra queja con anterioridad, pero esta vez para que aplicará en todos los estados. En este caso, el Tribunal pidió al Instituto Nacional Electoral (INEA) que todos los institutos electorales estatales se encargarán de aplicar estas medidas. Como respuesta el INE propuso que cada partido político nacional postulara 6 fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad bajo el principio de mayoría relativa, para diputaciones federales. En el caso del principio de representación proporcional el Consejo General del INE exigió a los partidos políticos 2 fórmulas integradas con personas con discapacidad, en cualquier de las cinco circunscripciones plurinominales, pero colocados en los primeros diez lugares de la lista (INE/CG18/2021).

La configuración de las cuotas para personas con discapacidad se centró en requisitos mínimos para el registro de candidaturas y no contempló otros aspectos institucionales para garantizar espacios en la Cámara de Diputados. Yurisha Andrade (2019) establece una serie de criterios que fortalecerían las candidaturas de las personas con discapacidad. Según esos requisitos, la configuración establecida por el INE para las elecciones del 2021 no incluyó la distribución de cuotas en referencia a la presencia de personas con discapacidad por distrito electoral. Asimismo, no incorporó clausuras de competitividad para garantizar que estas candidaturas se competieran en distritos rentables electoralmente. Tampoco, se reconocieron cuotas dentro de las cuotas, distribuidas para los distintos tipos de discapacidad. En el caso las discapacidades intelectuales, se tendría que contemplar la posibilidad de reconocer a los tutores. Por último, las cuotas para personas con discapacidad no fueron acompañadas de cambios de legislación en la ley de partidos políticos y no se incluyó una definición de discapacidad en la ley electoral. Sin estas medidas la configuración de las cuotas es endeble y reduce las posibilidades de que personas con discapacidad puedan ganar espacios en el poder legislativo.

Observación electoral. Resultados de candidaturas de personas con discapacidad

En el análisis de personas con discapacidad se observaron los siguientes elementos: el número de personas registradas por medio de la acción afirmativa, los presupuestos asignados a los/as candidatos/as, el porcentaje de votos obtenidos, las plataformas electorales de los partidos políticos en relación a las propuestas dedicadas a las personas con discapacidad, las formas de comunicación que se utilizaron para dar a conocer las propuestas y las trayectorias políticas de los/as candidatos/as que resultaron electos/as por mayoría relativa y representación proporcional². La información obtenida estuvo publicada en la plataforma candidatos y candidatas del INE³, sin embargo, no está completa, debido a que los partidos políticos decidieron mantener en anonimato las candidaturas registradas bajo los supuestos la acción afirmativa, apelando a la protección de datos personales. El resguardo de la información no permite corroborar entre otras cosas, si las personas que fueron registradas por medio de esta medida realmente contaban con una discapacidad, así como, no permite que se exprese abiertamente una condición que requiere ser visibilizada en el espacio público para transformar la representación.

En un cuestionario sobre identidad que fue aplicado a todos/as los/as candidatos/as registrados/as, el INE obtuvo como respuesta que 155 personas de 6420 se autoidentificaron con alguna discapacidad. Sin embargo, el INE expresa que no necesariamente todas esas personas fueron registradas por medio de las acciones afirmativas. De ese cuestionario se desprende que Movimiento Ciudadano (MC) es el partido que más candidatos/as se autoreconocen como personas con discapacidad con el 22.58 por ciento, seguido del PES con el 14.83 por ciento y Fuerza por México con el 10.32 por ciento. Estos tres partidos comparten en no ser las primeras fuerzas electorales en esa elección. En cambio, los partidos políticos con menos candidatos/as identificados/as como personas con discapacidad fueron la coalición Juntos Haremos Historia (MORENA, PVEM y PT) con 4.51 por ciento, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en solitario con 4.51 por ciento, la

² La base de datos que dio origen a esta investigación se encuentra en la página del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara. <http://www.observatorioelectoral.cucsh.udg.mx/>.

³ La información puede consultarse en el siguiente sitio web <https://candidaturas.ine.mx/>

Alianza Va por México (PAN, PRI, PRD) con 3.87 por ciento y el Partido Acción Nacional (PAN) con 3.22 por ciento. Los partidos políticos en los últimos lugares de personas con discapacidad fueron los partidos más rentables electoralmente en la elección del 2020-2021. No es coincidencia que entre más alejados los partidos políticos se encuentren de ganar escaños en la Cámara de Diputados, más incluyen dentro de sus candidaturas a personas con discapacidad. Entre otras razones, podría considerarse que pueden arriesgarse un poco más que los partidos políticos más rentables, porque tienen menos que perder. En su lugar, los partidos más rentables demuestran que no confían en las personas con discapacidad como candidatas con posibilidades de ganar y por eso se arriesgan menos en incluirlas.

En la plataforma del INE sólo se ubican abiertamente y sin resguardo de la información, a 32 personas con discapacidad registradas para una diputación a nivel federal; 16 son mujeres y 16 son hombres. Aunque algunas investigaciones periodísticas han publicado que 97 personas con discapacidad contendieron para algún cargo de elección popular en los comicios 2020-2021, sin hacer distinción de qué cargos se disputaron (D'Artigues, 2 de junio del 2021). Al ser comparado con el proceso electoral anterior, en donde se registraron sólo 61 personas con discapacidad, se puede mostrar un incremento de registro del 35 por ciento. Este es el primero efecto importante de las acciones afirmativas.

Los partidos políticos que mayor presupuesto designaron a las candidaturas de personas con discapacidad fueron el Partido del Trabajo (PT), el cual tuvo los primeros 5 lugares de candidatos/as con alguna discapacidad mejor financiados por partido político, le siguió MC con 1, la coalición Juntos Hacemos Historia con 2 y Partido Verde de México (PVEM) con 1. Estos partidos juntos comprenden los 10 primeros lugares de mayor financiamiento para candidaturas de personas con discapacidad.

La votación obtenida en promedio en cada distrito electoral por candidatos/as con alguna discapacidad se encuentra en 10 por ciento, lo que demuestra que los/as votantes todavía no ven como una opción electoral rentable a las personas con esta condición para integrar la representación política.

Al final de la contienda 4 personas con discapacidad lograron ser electas por el principio de mayoría; 3 hombres y 1 mujer. Además, se integraron por el principio de la representación proporcional 4 personas más a través de la acción afirmativa, todas ellas candidatas. En comparación con la composición de la cámara de diputados de la elección anterior, donde sólo una persona con discapacidad fue electa (Hugo Lustre de MORENA), el incremento a 8 representó el 88 por ciento. Este resultado también es una prueba fuerte de que establecer acciones afirmativas, en formato de cuotas electorales, tiene un efecto positivo inmediato.

En el caso de cómo comunicaron los partidos políticos sus plataformas electorales y en especial las propuestas dirigidas a las personas con discapacidad, se encontró una falta de compromiso y de interés en esa población. El partido político que mayores menciones realizó de las personas con discapacidad en su plataforma fue el PVEM con 36 menciones. Sin embargo, sólo exponen 5 propuestas concretas en su plataforma. El Partido Revolucionario Institucional le sigue con 15 menciones, pero que en términos prácticos fueron suficientes para ofertar 22 propuestas dirigidas a esa población. Los partidos con menos menciones fueron MC con 3 y Fuerza Por México con ninguna. Sobre MC es relevante destacar que fue el partido político que más postuló personas con discapacidad, pero, no las incluyó en sus propuestas de campaña, mostrando una contradicción de fondo. Las propuestas concretas de todos los partidos versaban principalmente sobre temas de empleo (10 propuestas) y accesibilidad material y técnica (6 propuestas), apoyos sustanciales para promover la autonomía de las personas con discapacidad. En contraste, sólo 2 propuestas tratan sobre la participación política de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas. En general, esto es muestra de que los partidos políticos no contemplan a las personas con discapacidad como agentes políticos.

Las plataformas electorales en formato escrito fueron acompañadas de videos que también son expresiones del poco interés en el votante con alguna discapacidad. Ninguno de los videos contaba con traducción en lenguaje a señas. De todos los partidos sólo 4 incluyeron subtítulos en el video (PRI, PVEM, MC, RSP). Ningún

partido político incluyó algún material con lenguaje de lectura fácil para personas alguna discapacidad intelectual. En los videos sólo dos partidos incluyeron propuestas para personas con discapacidad (PRI, MORENA). Como se puede notar los intereses de las personas con discapacidad no están ampliamente representados en las plataformas electorales, y la comunicación que los partidos políticos generaron no incluyeron distintas formas de expresión, necesarias para que todas las personas puedan acceder a su comprensión.

Los elementos clave para el éxito de las candidaturas de personas con discapacidad

Al analizar los perfiles de los/as candidatos/as que fueron electos/as por ambos principios, se pueden encontrar algunas claves sustanciales para el éxito electoral. De las 4 personas con discapacidad electas, Carlos Sánchez Barrios, Andrés Pinto Caballero, Pedro David Ortega Fonseca y Mónica Herrera Villavicencio, todas fueron registradas por el partido MORENA y/o la coalición en la que participa el partido que contaba con la mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, así como en la presidencia de la República. La aceptación del partido MORENA se le puede atribuir a la alta legitimidad con la que cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es militante del partido. El financiamiento fue importante en el éxito, pero no determinante, ya que el gasto que reportaron en el INE comprende entre el tercer y quinto lugar del reportado por todos los partidos políticos que competieron en la misma elección y distrito. Más gasto, no necesariamente representó mayores posibilidades de ganar. Otro factor importante para ganar fue la actividad realizada por los/as candidatos/as antes de la elección dentro de los partidos políticos y en cargos públicos. 3 de los 4 ganadores/as ya contaban con trayectoria partidista, uno fue presidente municipal, otro consejero político del partido y el tercero coordinador operativo territorial también del partido.

En el caso de las candidatas que lograron acceder a la diputación federal por medio del principio de representación proporcional, se presume que tres de ellas cuentan con conocida trayectoria activista y partidista y dos de ellas fueron postuladas por un partido que internamente ha incorporado el tema de la discapacidad dentro de sus estatutos. Norma Aceves militante del PRI ha estado en varios cargos dentro

de su partido, la mayoría de ellos relacionados con la participación de las personas con discapacidad. También, ha tenido puestos en el Senado y en la administración pública. Yolanda Torre militante también del PRI ha sido diputada local, senadora, secretaria de desarrollo en el estado de Durango y dos veces diputada federal. Al igual que Norma, su actividad legislativa y en el gobierno ha estado dirigida a los grupos vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad. El PRI, partido de estas dos diputadas, presentó más propuestas concretas sobre discapacidad en su plataforma electoral, que también estuvieron incluidas en su video promocional. Además, el PRI es el único partido que dentro de sus estatutos reconoce cuotas para personas con discapacidad (Carreón y Flores. 2019). El rol activo de los partidos políticos, tanto en la configuración de propuestas, como en la organización interna de su militancia, fue un factor clave para éxito de las candidaturas de personas con discapacidad bajo el principio de representación proporcional.

Catalina Díaz Vilchis es la tercera candidata electa por el principio de representación proporcional y registrada a través de la acción afirmativa de personas con discapacidad por el partido MORENA. Catalina tiene una discapacidad motriz y es conocida por ser una deportista paralímpica. Aunque no se tiene registro de haber participado políticamente en otros espacios, es una persona reconocida en la comunidad de personas con discapacidad. La cuarta candidata electa por el principio de representación proporcional fue registrada también por el partido mayoritario MORENA. Sin embargo, no se le reconocen vínculos con la comunidad de las personas con discapacidad. Cecilia Márquez Alkadeh es reconocida en Jalisco por ser conductora y periodista.

El factor más determinante para el éxito o fracaso de las candidaturas de las personas con discapacidad es el partido político que postula. Entre mayor aceptación a nivel federal tenga el partido político mayores posibilidades se tiene para que estas candidaturas logren un cargo de elección. Por otra parte, también es importante que los partidos políticos adopten las agendas de las personas con discapacidad en su organización interna y en sus propuestas, esto producirá que se apoyen con mayor compromiso sus candidaturas.

Conclusiones y la agenda pendiente

Las cuotas para candidaturas de personas con discapacidad para desempeñarse en una diputación federal abren la posibilidad de ensanchar la representación política y con ello beneficiar a la democracia. Las teorías que defienden a la representación y que ligan su actividad a la deliberación, no se han cuestionado que las personas con discapacidad no pueden acceder a esos espacios de discusión pública de forma sencilla. Estas propuestas no han prestado atención en las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para comunicarse en las deliberaciones y para movilizarse en los espacios de deliberación. Cualquier propuesta de representación basada en la deliberación, debe contemplar distintas formas de expresión y garantizar espacios accesibles.

A pesar de ello, se ha comprobado que la representación puede ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad para incluir sus intereses en la agenda y visibilizar a través de su presencia distintas formas de ejercer la ciudadanía. Por ello, la inclusión de esta población en el espacio de toma de decisiones puede beneficiar a las instituciones democráticas, debido a que incluir a minorías produce legitimidad y en general una mejor evaluación para los gobiernos. Por último, la representación política de estas personas abre el debate sobre quiénes son ciudadanos/as y bajo qué circunstancias. En las narrativas públicas, la normalidad, el cuerpo sano y la igualdad serían debatidos para crear un discurso más abierto a la diversidad de identidades, pero también de cuerpos alternos. La visibilidad pública de las personas con discapacidad en espacios de poder ayudaría a liberar a la ciudadanía de los supuestos homogeneizantes de la normalidad y permitir la diferencia como el factor mayoritario de cualquier comunidad política.

Aunque las cuotas de las personas con discapacidad son muestra de un gran avance, es cierto, que los resultados todavía no reflejan en proporción real la presencia de esa población. La configuración institucional de las cuotas es endeble porque no ha considerado factores territoriales, candados competitivos y la diversidad dentro de la discapacidad. Las reglas establecidas en la elección sólo

presentan criterios mínimos exigibles a los partidos políticos, sin profundizar en los arreglos institucionales necesarios para que sean más exitosas.

Además, la forma en cómo comunican sus propuestas los partidos políticos no han estado acorde a las nuevas medidas, es decir, por una parte, se promueven estas candidaturas, pero por otra, no se incrementan los esfuerzos para que esta población participe activamente a través de campañas políticas más incluyentes, con información accesible para todos/as, sin importar su condición física e intelectual.

Por último, la observación de los/as candidatos/as ganadores/as de un escaño en la Cámara de Diputados mostró que la rentabilidad electoral del partido político postulante es determinante para ser electo/a por el principio de mayoría. En cambio, para el principio de representación proporcional, se demostró que los partidos políticos que contemplen dentro de su organización interna a las personas con discapacidad influyen en que se obtengan escaños por medio de este principio. En cualquiera de los dos principios, la trayectoria política de los/s candidatos/as fue importante para que puedan obtener un escaño legislativo.

Bibliografía:

Andrade M., Y. (2019). Representación política de las personas con discapacidad. *Justicia Electoral*, 24, 87-122.

Baducci, et al. (2004). Minority representation, empowerment, and participation. *The journal of politics*, 66(2), 534-556.

Beckett, A. E. (2006). *Citizenship and vulnerability. Disability and issues of social and political engagement*. Palgrave Macmillan. DOI 10.1057/9780230501294.

Brennan, G. and Hamlin, A. (1999). On political representation. *British Journal of Political Science*, 29 (1), 109-127.

Carreón Castro, M. y Flores Pantoja, R. (2019). Personas con discapacidad y sus derechos político-electorales. Espíndola Morales, L. (coord.). *Diálogos democráticos*. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. 189-205.

Consejo General del Instituto Nacional Electoral (15 de enero del 2021). *Acuerdo INE/CG18/202*.

D'Artigues, K. (2021, 2 de junio). ¿Quiénes serán las pcd que ganen este 6 de junio? *Yo también. Discapacidad con todas sus letras*. <https://bit.ly/3KZIDwd>.

Ellcessor, E. (2016). *Restricted access. Media, disability and the politics of participation*. New York University Press.

García Mora, M. E. et al. (2021). *Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible*. Banco Mundial. <https://bit.ly/3FUy8oQ>.

González Luna Corvera, T., Rodríguez Z., J. & Sahuí M., A. (2017). *Para discutir la acción afirmativa. Democracia, procesos y circunstancias. Volumen 2*. Universidad de Guadalajara.

Goldman, A. H. (1976). Affirmative action. *Philosophy & Public Affairs*. 5 (2), 178-195.

INEGI (2020). *Discapacidad*. <https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/>

Instituto Nacional Electoral (2021). *¡Candidatas y candidatos, conócelos!* <https://candidaturas.ine.mx/>.

Levín Rojo, E., et al. (2015). "Yo elijo". Participación política y derecho a la ciudadanía de las personas con discapacidad". *Política y Cultura*, 44, 137-156.

Martínez Hernández, N. P. (2012). *Acciones legislativas implementadas en México en materia de derechos políticos de las personas con discapacidad (2000-2011)*. Tesis para obtener el título de Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad Autónoma del Estado de México.

Minich, J. A. (2014). Accessible citizenships. Disability, nation, and the cultural politics of greater Mexico. *Temple University Press*.

Naciones Unidas (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. <https://bit.ly/3sfHV3Y>.

OMS (2021, 24 de noviembre). *Discapacidad y salud*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.

Pérez-Campos, I. (2019). Protección de las personas con discapacidad, rumbo a la paridad flexible. Expedientes SUP-REC-1150/2018 y SUP-JDC-1282/2019. *Justicia y Sufragio*.

Pitkin, H. (1985). *El concepto de representación*. Centro de Estudios Constitucionales.

Phillips, A. (1993). *Democracy and difference*. Polity Press.

Plotke, D. (1997). Representation is democracy. *Constellations*, 4 (1), 19-37.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (24 de abril del 2018) *Expediente SUP-AG-40/2018*.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (6 de septiembre del 2018) *Expediente SUP-REC-1150/2018*.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (14 de noviembre del 2019) *Expediente SUP-JDC-1282/2019*.

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (31 de diciembre del 2020) *Expediente SUP-RAP-121/2020 Y ACUMULADOS*.

Urbinati, N. (2000). Representation as advocacy: A study of democratic deliberation. *Sage Publications*. 28 (6), 758-786.

Warren, M. E. (2005). La democracia contra la corrupción. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. XLVII (193), 109-140.

Síntesis curricular

Maestra en Estudios Filosóficos, Licenciada en Estudios Políticos y Gobierno ambas por la Universidad de Guadalajara. Ha cursado dos diplomados: “Gobernabilidad y Gerencia Política” por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/ The George Washington University, The Graduate School of Political Management y el diplomado “Gobernabilidad y Reforma del Estado en América Latina” por la Universidad Complutense de Madrid/ Universidad de Guadalajara. Profesora de tiempo completo en la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno. Ha impartido clases de Seminario de Tesis Análisis Institucional, Filosofía Política Contemporánea, Ética y Política y Ética Pública. Ponente en conferencias nacionales e internacionales de filosofía y ciencias sociales con temas que versan sobre el contractualismo, los límites de la violencia legítima, enemigo público y participación ciudadana. Co-coordinadora de la Línea de Participación y Ciudadanía del Observatorio Electoral de la UDG. Entre sus intereses de investigación se encuentran: mecanismos de participación ciudadana, manifestaciones, protestas sociales y participación electoral y no electoral.